



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-017-2019-00740-01 (O2-20-099)  
**Demandante:** ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ  
**Demandada:** URBANIZACIÓN STANZA P.H.  
**Procedencia:** JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Asunto:** CONTRATO REALIDAD

En Medellín, a los cuatro (04) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021), **la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, y CARLOS JORGE RUÍZ BOTERO, resuelve el **Recurso de Apelación** impetrado por ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ dentro del proceso ORDINARIO LABORAL que promovió en contra de la URBANIZACIÓN STANZA P.H., conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-017-2019-00740-01 (O2-20-099).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

### **1. ANTECEDENTES**

El señor ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la URBANIZACIÓN STANZA P.H. en procura de que se declare la existencia de un contrato de trabajo, y en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de las cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios, vacaciones, aportes a la seguridad social, indemnización por la mora en el pago de las prestaciones, indemnización por la

falta de consignación de las cesantías, e indemnización por despido sin justa causa, con fundamento en que el 01 de abril de 2017 celebró un contrato de prestación de servicios con la propiedad horizontal demandada, que se desempeñó como administrador hasta el 30 de junio de 2019, que recibió como remuneración la suma de \$2.200.000 durante el año 2017, y \$3.500.000 desde el año 2018, que los presidentes del Consejo de Administración le exigían prestar personalmente el servicio, cumplir una jornada de trabajo de más de ocho horas diarias, siete días a la semana, cumplir funciones adicionales en beneficio de la administración, entregar planes de trabajo para medir los tiempos de efectividad y cumplimiento de las tareas asignadas, reportar las actividades que realizaba diariamente, dentro y fuera de la copropiedad, que no tenía independencia económica, administrativa, ni técnica, que en razón de las múltiples tareas y jornada de trabajo asignadas, no podía trabajar para otras empresas. Además, cuenta que prestaba sus servicios en las instalaciones y con los elementos de trabajo de la propiedad horizontal, que el 31 de enero de 2017 sufrió un accidente de tránsito, y estuvo hospitalizado durante siete días, periodo durante el que tuvo que desarrollar algunas actividades de la propiedad, por requerimiento del Presidente del Consejo de Administración, que para ausentarse por más de tres días, debía solicitar permiso ante el Consejo de Administración, y que durante el periodo en el que prestó sus servicios a favor de la propiedad horizontal demandada, la misma no le reconoció las prestaciones, vacaciones, aportes a la seguridad social e indemnizaciones que ahora reclama.

### **1.1. Trámite de Primera Instancia**

La demanda se admitió el 08 de noviembre de 2019 (Fol.128, Doc.01), y se notificó a la URBANIZACIÓN STANZA P.H. el 02 de diciembre del mismo año (Fol.131, Doc.01), propiedad horizontal que presentó contestación el día 16 del mismo mes y año (Fol.139-148, Doc.01), asintiendo en que suscribió un contrato de prestación de servicios con el actor, el cual se desempeñó como administrador de la unidad residencial, hasta el 30 de junio de 2019, que cumplía con las funciones asignadas en las instalaciones de la copropiedad, y que no se reconocieron a su favor las prestaciones, vacaciones, aportes a la seguridad social, e indemnizaciones que ahora reclama, porque dichos conceptos solo se derivan de los contratos de trabajo, sin que entre las partes se hubiere configurado una relación laboral. Adicionalmente afirmó que la relación contractual con el actor feneció por una de las causales de terminación anticipada, pactadas en el contrato de prestación

de servicios, que dicho contrato fue celebrado en los términos de la Ley 675 de 2001, que la remuneración de la prestación de servicios variaba cada año, que las funciones que desempeñaba dependían de los requerimientos y necesidades de la propiedad horizontal, sin el cumplimiento de horarios, y con plena autonomía del contratista, bajo las directrices emanadas del consejo de administración, lo que incluía la ejecución de un presupuesto, que los elementos de trabajo eran suministrados por el contratista, que cuando disfrutaba de vacaciones, era el consejo quien se encargaba de las necesidades de la copropiedad, y por último, que podía prestar el servicio a cualquier hora, y que podía ausentarse de la copropiedad sin informarle al consejo de administración sobre sus ausencias.

## **1.2. Sentencia de Primera Instancia**

La controversia se dirimió en primera instancia por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el 27 de agosto de 2020 (Doc.07-10), disponiendo absolver a la URBANIZACIÓN STANZA P.H., de las pretensiones formuladas por ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ, porque la propiedad horizontal demandada había desvirtuado la presunción legal que se deriva de la prestación personal del servicio, esto es, porque no encontró acreditado que el actor hubiere prestado sus servicios bajo la continuada subordinación de la copropiedad demandada.

## **1.3. Recurso de Apelación**

La decisión antes descrita fue objeto del recurso de alzada por la apoderada judicial de la parte actora, quien afirmó que en el asunto de marras no se había desvirtuado la existencia de la relación laboral, por lo menos durante el periodo comprendido entre agosto de 2017 y junio de 2019, espacio de tiempo durante el cual, el actor, no solo debía cumplir una jornada de trabajo, sino también, acatar las exigencias que diariamente le eran impuestas por los miembros del consejo de administración, las cuales desbordaban las funciones que le corresponden al administrador de la propiedad horizontal, en el marco de la Ley 675 de 2001. También argumentó que, contrario a lo sentenciado por el *ad quo*, en el plenario se encuentra acreditado que el actor no tenía autonomía para la prestación del servicio, porque: (i) los miembros del consejo de administración adoptaban las decisiones que a él le competían como administrador, (ii) no contaba con la libertad para manejar su tiempo libre, ya que necesitaba pedir permisos para

ausentarse del servicio, y (iii) debía asistir diariamente a las instalaciones de la copropiedad, y prestar sus servicios de forma personal, sin posibilidad de delegar.

#### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

El 26 de octubre de 2020 (Doc.15), se admitió el recurso antes descrito, y 10 de noviembre del mismo año (Doc.16), se corrió traslado a las partes para que, por escrito, presentaran alegatos de conclusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020.

La apoderada judicial de ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ presentó alegatos de conclusión el 19 de noviembre de 2020 (Doc.17), solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, considerando que (i) la declaración de los testigos de la parte demandada no debió tenerse en cuenta, porque cayeron en contradicciones en sus afirmaciones, esto es, carecen de credibilidad; (ii) los testigos llamados a juicio por la parte actora, no fueron tachados por la parte demandada, y aun así, se presumió que los mismos pretendían favorecer al demandante; (iii) la forma de contratación de los administradores no está regida por una norma especial, y aunque éste fuera el caso, debía aplicarse el principio de la realidad sobre las formas; y (iv) que las declaraciones que se rindieron al interior del proceso, dan cuenta de la existencia de actos subordinantes.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

### **2.1. Problema Jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si entre ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ y la URBANIZACIÓN STANZA P.H. realmente existió una relación laboral, y de tenerse certidumbre de ello, en consecuencia, si al actor le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, vacaciones, aportes a la seguridad social e indemnizaciones

demandadas, para lo cual será necesario establecer en específico: ¿si la propiedad horizontal demandada logró desvirtuar la presunción legal de la existencia del contrato de trabajo que se deriva de la prestación personal del servicio?

## **2.2. Sentido del Fallo**

La Sala confirmará la decisión absolutoria de primer grado, considerando que las pruebas arrojadas al plenario realmente desvirtuaron la existencia de contrato de trabajo entre los extremos litigiosos, al traslucir que el actor no estaba bajo la continuada subordinación o dependencia respecto de la copropiedad demandada.

## **2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado**

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y por ello en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 53, 55, 56 y 64 de la Constitución Política, el constituyente derivado se ocupó de brindarle una protección especial, reconociéndolo como aquel que le asiste a toda persona para pretender y obtener un trabajo en condiciones dignas, no solo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y una calidad de vida digna de las personas, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural, denominada trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, denominada empleador, bajo su continuada dependencia o subordinación, servicio por el cual el trabajador recibe una remuneración (artículo 22 del CST). Son elementos esenciales del contrato de trabajo (i) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; (ii) la continua subordinación o dependencia del trabajador, que faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes, y (iii) un salario como retribución del servicio (artículo 23 del CST).

Reunidos los elementos antes descritos, se presume que existe un contrato de trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen (artículo 24 CST), por lo que, al trabajador que alega la existencia de un contrato de trabajo, le basta con acreditar la prestación personal de un servicio para que opere la presunción legal, invirtiéndose la carga de la prueba en cabeza del empleador, quien para desvirtuar dicha la presunción tendrá que acreditar que la relación contractual nunca estuvo presidida de subordinación, como elemento esencial, tipificador y diferencial del contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios personales, y entendida como la *“aptitud o facultad del empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador y de vigilar su cumplimiento en cualquier momento, durante la ejecución del contrato, y la obligación permanente del trabajador de obedecerlas y acatarlas cumplidamente”* (CSJ SL-6258 del 01-07-1994, SL-22259 del 02-08-04, SL-16528 del 26-10-2016).

#### **2.4. Acervo Probatorio Recabado**

En el plenario se encuentra acreditado que ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ presentó oferta de servicios para la representación legal y administración de la URBANIZACIÓN STANZA P.H. el 21 de septiembre de 2016, que aceptada la oferta por el consejo de administración, se suscribieron sucesivos contratos de prestación de servicios entre el 01 de octubre de 2016 y el 30 de noviembre de 2016, entre el 01 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, entre el 01 de abril de 2018 y el 30 de marzo de 2019, y entre el 01 de abril de 2019 y el 30 de junio de 2019, y que el actor, a su vez, contrató los servicios de JORGE IVAN BOTERO ARANGO para que se desempeñara como su auxiliar administrativo, entre el 11 de diciembre de 2018 y el 10 de febrero de 2019, y entre el 11 de febrero de 2019 y el 10 de mayo de 2019; elementos fácticos que se extraen de la oferta de servicios de administración (Fol.26-31, Doc.01), los contratos de prestación de servicio incorporados (Fol.32-42, 43-53, 54-78, 83-90 Doc.01), el certificado de existencia y representación legal de la propiedad horizontal (Fol.91, Doc.01), y los contratos de prestación de servicios para auxiliar administrativo (Fl.79-82, Doc.01).

También obra constancia de que el 05 de febrero de 2019 el copropietario del apartamento 1804 señaló por escrito los aspectos que lo inquietaban sobre el manejo del personal y los recursos de la copropiedad, entre las que destacó *“... aclarar qué tipo de contrato posee el administrador, ya que se ve todos los días [...]*

*lo cual esperamos no genere una vinculación laboral"; y que el 12 de febrero de 2019 el actor emitió pronunciamiento sobre los aspectos cuestionados, previo cruce de información con los miembros del consejo de administración, oportunidad en la que expresamente indicó "... como administrador vengo desempeñándome desde octubre de 2016 bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios [...] Algunos miembros del consejo han solicitado en varias ocasiones que como administrador debo cumplir horario [...] pero he sido claro en comunicarles que , como prestador de servicios, no estoy obligado a cumplir horarios ni seguir órdenes directas de los miembros del consejo. Ante las necesidades que ha requerido la URBANIZACIÓN STANZA por aun tener presentes obreros de la constructora [...] se accedió a laborar en la unidad un mayor tiempo, cuando se requiera, claro está sin el requisito de cumplir horario como se estaba solicitando"; tal y como puede leerse en el informe de inquietudes (Fol.93-94, Doc.01), el cruce de correos (Fol.96-102, Doc.01), y en la respuesta que se remitió al copropietario (Fol.103-111, Doc.01).*

Advierte además la Sala que el 02 de abril de 2019 los miembros del consejo solicitaron el cambio del administrador; que el 05 de abril de 2019 el actor se pronunció sobre los aspectos que, a consideración de los miembros del consejo, justificaban el cambio de administrador, y que el actor rindió informe sobre todas y cada una de las actividades que realizó durante los meses de abril y mayo del año 2019; como se infiere de las actas de reunión del consejo de administración (Fol.111-119, Doc.01), y los informes de las actividades realizadas por la administración (Fol.120-125, Doc.01).

Al margen de lo dicho, la Sala evidencia que en la diligencia que tuvo lugar el 27 de agosto de 2020 (Doc.07-10), el demandante ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ (desde el minuto 20:20, video audiencia, parte 1), como hechos relevantes en lo que interesa con la decisión del recurso de alzada, confesó, en los términos previstos en el artículo 191 del CGP, que fue él quien le suministró al consejo de administración el formato para celebrar el contrato de prestación de servicios (minuto 23:35), que en la oferta de servicios de administrador ofreció visitar la copropiedad de lunes a viernes tres veces a la semana, durante 4 horas, que en el consejo se estableció que las visitas se harían los lunes, miércoles y viernes, en horarios alternados en la mañana y la tarde, que él escogía si realizaba las visitas en la mañana o en la tarde (minuto 31:20), que la asignación de los horarios nunca se suministró por escrito (minuto 32:30), que los horarios fueron cambiando con el transcurso del tiempo hasta que prácticamente permanecía todos los días en la

copropiedad (*minuto 33:12*), que el presidente del consejo de administración empezó a llamar constantemente a la portería preguntando si estaba en la unidad, a qué hora se había hecho presente, o a cuál se había retirado (*minuto 33:45*), que las funciones que desempeñaba, y desbordaban las descritas en la Ley 675 de 2001 eran: (i) asistir a las reuniones inventadas por el presidente del consejo para revisar cuantas goteras quedaron en el parqueadero después de un aguacero, (ii) mostrar apartamentos para venta y alquiler, (iii) hacer las compras directas de los insumos de la copropiedad para abaratar los costos, y (iv) hacer reparaciones dentro del edificio (*minuto 40:39*), a más de que el presidente del consejo se extralimitó en sus funciones, negociando directamente con la empresa de aseo, los contratos suscritos desde 2017, a sus espaldas, colocando en riesgo el patrimonio de la copropiedad (*minuto 41:55*), y que solo fue autónomo en los horarios, y para la toma de decisiones hasta mediados de 2017 (*minuto 45:00*), aproximadamente hasta el mes de agosto de 2017 (*min 46:18*).

De igual forma, se escuchó a la señora MARIA PAULINA CORDOBA ARANGO, en calidad de representante legal de la URBANIZACIÓN STANZA P.H. (*desde el minuto 52:44, video audiencia, parte 1*), quien, como hechos relevantes para el recurso de alzada, admitió que el actor se retiró de la copropiedad porque tenía diferencias con el consejo de administración, y que en las entrevistas con el consejo de administración nunca se habló del cumplimiento de horarios.

JORGE IVAN BOTERO (*desde el minuto 01:06:35, video audiencia, parte 1*), manifestó que conoce al actor hace 12 años porque fueron compañeros de trabajo, que aquel trabajó para la demandada como administrador, que estuvo allí durante 3 o 4 años, que al actor no le impusieron un horario como tal, pero le exigían ir todos los días, que comenzaba a laborar a las 7, 8 o 9 de la mañana, que el presidente del consejo le exigió contratar a un asistente y entonces lo contrató a él, que era el actor quien le pagaba los honorarios, que siempre le pedían rendir informes, comprar directamente los insumos, y hacer los endosos de los copropietarios, que el actor dejó de prestar los servicios por decisión del consejo de administración, que el actor no llevaba un registro de horario, pero en el celular están registradas las llamadas que siempre le hacían, que el presidente del consejo siempre estaba presionándolo. Añade que el actor administró otra propiedad entre marzo y septiembre, y le tocó entregarla porque las obligaciones de Stanza no lo dejaron continuar, que el actor nunca salió de vacaciones, que incluso lo estuvieron llamando durante la celebración de su matrimonio el 01 de diciembre



de 2018, que se fue de viaje pero lo siguieron llamando, que tuvo un accidente y también lo estuvieron llamando, le hicieron llamados de atención verbal cuando se ausentaba de la unidad, que cuando el actor no estaba en la unidad él era el encargado pero siempre cumplía las instrucciones del demandante (minuto 01:25:00), que el actor podía delegar la supervisión más no la toma de decisiones (minuto 01:27:50), que el actor utilizaba la impresora y el computador de su propiedad (minuto 01:29:40), que no conoció que al actor se le hubiera adelantado un proceso disciplinario, y que el presidente del consejo le exigió llevar indicadores claves de desempeño (KPI).

ANA MARIA BUILES RESTRESPO (desde el minuto 01:40:03, video audiencia, parte 1 - continúa en video audiencia, parte 2), sostuvo que conoció al actor porque trabajaba para la empresa que recibió la administración provisional de la copropiedad, y luego quedó como administrador, que hizo parte del consejo de administración durante el año 2019, que desde el año 2017 la copropiedad suscribió con el actor contratos de prestación de servicios para que se desempeñara como administrador, que el actor no tenía una jornada de trabajo específico asignado (minuto 06:50, que cuando tenía pico y placa llegaba muy temprano, o después de las 9am, que el mismo podía organizar -cuadrar- sus horarios (minuto 07:11). Resalta que cuando existía una necesidad urgente, llamaban al demandante para que contactara a los proveedores y él también se presentaba, que el actor iba todos los días de una semana, y a veces no iba (minuto 07:55), que el actor no tenía un auxiliar que le colaboraba, pero recuerda un amigo que lo acompañaba, que el actor nunca le manifestó que se sentía bajo un contrato del trabajo, pero cuando terminó la relación, le informó que los iba a demandar, que la asamblea determina las inversiones de la vigencia fiscal, y estando en el consejo de administración pudo verificar que el actor no las ejecutaba, y las obras se fueron atrasando, que el actor podía entrar y salir a cualquier hora de la copropiedad (minuto 13:40), que el actor tuvo un accidente, y durante su recuperación la copropiedad funcionaba a través de los miembros del consejo porque el actor no estaba prestando el servicio (minuto 15:32), que el actor le presentó a Jorge Iván Botero como un amigo; que cuando el consejo empezó a pedirle resultados al actor de las inversiones que había aprobado la asamblea, el actor comenzó a decir que lo tenían cumpliendo horario (minuto 18:18), que hicieron un barrido con todas las decisiones que había tomado la asamblea y se le entregó al actor un listado de las actividades pendientes de ejecución para que las ejecutara en el término de un año (minuto 18:54), que como

presidenta del consejo de administración le solicitó al actor realizar una bitácora de las actividades que realizaba para presentarle cada mes al consejo informe sobre el avance en las actividades que iba a ejecutar en el mes (*minuto 20:26*), que desde marzo de 2019, cuando asumió como presidenta, y hasta la fecha en que prestó sus servicios el actor, no le exigió cumplimiento de horarios, ni que estuviera todos los días en la unidad (*minuto 23:08*), que nunca le generó un llamado de atención porque no estaba en la copropiedad o por cualquier otra circunstancia (*minuto 26:34*), que en algunas ocasiones el actor dejó de asistir a la copropiedad y prestaba su labor telefónicamente (*minuto 27:50*), que el actor no tenía que pedir permiso para ausentarse, pero le informaba por qué quería hacerlo (*minuto 29:45*), que las actividades señaladas en la bitácora eran ejecutadas por el actor en el momento que lo considerara pertinente (*minuto 31:35*), que en el consejo se establecían cuáles eran los requisitos que debían cumplirse para ejecutar las obras, como número de cotizaciones, calidades de los proveedores, calidades de los implementos, borrador del contrato del proveedor, todo para poder justificar los gastos (*minuto 32:55*), que no existen registros de las horas de ingreso y salida del actor a la copropiedad, que el actor nunca fue objeto de proceso disciplinario o sanción por el incumplimiento de las tareas que le correspondían (*minuto 35:20*), que el actor se retiró en junio o julio de 2019, que los miembros del consejo no le impartían órdenes directas, sino que le pedían que informara si había ejecutado determinada tarea (*minuto 44:36*), que los miembros del consejo no le exigían al actor estar diariamente en la unidad (*minuto 48:32*), que solo supervisaba las actividades del actor durante la reunión del consejo (*minuto 48:54*), que el actor era quien diligencia las bitácoras de las actividades desarrolladas, no asistía acompañado a los consejos de administración, y solo al final lo acompañaba el amigo, hecho que era cuestionado por los miembros del consejo de administración, y frente al cual el demandante les informaba que era un amigo (*minuto 55:30*). Por último, indica que la asamblea aprobada el presupuesto en el que se determinaba el valor de cada ítem (*minuto 56:56*), y que el actor podía contratar terceras personas, aunque nunca notificó dicha circunstancia.

JAIRO ANDRES RUIZ SÁNCHEZ (*desde el minuto 01:40:03, video audiencia, parte 2*), indicó que conoce al actor porque era su jefe en la unidad Stanza, cuando trabajaba como vigilante, que el actor era el administrador de la copropiedad, que desconoce el tipo de contrato que tenía, que cuando la unidad estaba empezando el actor llegaba a las 8am y se quedaba hasta el mediodía, o llegaba a la 1pm y se iba a las 5pm (*minuto 01:05:08*), que cuando entregaron toda la torre

1, como a principios de 2017, se quedaba en la copropiedad todo el día, que siempre llegaba entre las 8am y 8:30am(*minuto 01:06:36*), que el actor tenía que contar con autorización del consejo para poder salir de la unidad (*minuto 01:07:32*), que no le constaba que el actor tuviera que pedir permiso, sino que el presidente del consejo llamaba a la portería a confirmar si había salido (*minuto 01:09:20*), que durante los años 2017 y 2018 la oficina del actor era en la portería, en presencia suya, y que allí fue que se enteró del horario, que desconoce que al actor se le hubiere iniciado un proceso disciplinario por el incumplimiento de horarios (*minuto 01:13:00*), que los miembros del consejo de administración se la pasaban llamando al actor para preguntarle qué estaba haciendo, que se retiró de la unidad en agosto de 2018 y no conoce las circunstancias bajo las que el actor prestó sus servicios desde entonces, que los miembros del consejo de administración le daban ordenes al actor (*minuto 01:18:45*), que el actor tenía que estar pendiente del cambio de bombillería, del mantenimiento de la piscina, organizar las fiestas de navidad y halloween, comprar los insumos de la cafetería(*minuta 01:23:27*), que el consejo le daba las órdenes al actor de forma verbal, y que cuando el actor no se presentaba a la copropiedad los miembros del consejo llamaban a la portería preguntando si ya había llegado (*minuto 01:31:00*).

YMER RENE DAVAUS (*desde el minuto 01:33:45, video audiencia, parte 2*), informó que conoció al actor porque fue administrador de la copropiedad en la que vive, que tenía un contrato de prestación de servicios profesionales, que no cumplía horario de trabajo, que fue presidente del consejo de administración entre 2018 y 2019, que nunca le indicó al actor que debía cumplir jornada de trabajo de lunes a sábado, o que estuviera todo el tiempo en la unidad, que las visitas del actor a la unidad dependían de las actividades que tuviera pendientes, iba en la tarde, en la mañana, o en la noche, que no le tenía que pedir permiso para retirarse de la copropiedad, que solo llamaba a la portería para preguntar por el actor cuando tenían un asunto pendiente y él no había llegado, nunca a manera de auditoría o control, que el actor debía presentar informe ante el consejo de administración una vez al mes, que cuando el actor tuvo el accidente automovilístico nadie prestó el servicio de administrador, que el actor no tenía asignado un asistente para el cumplimiento de las funciones, que él andaba con un amigo que lo acompañaba a las asambleas de la copropiedad, pero era ajeno a la copropiedad, que el actor no tenía que reportar el ingreso o salida de la copropiedad, que el consejo nunca le exigió al actor tener una persona para reemplazarlo durante las ausencias, pero sí, que diseñara una estructura de respuesta frente a una emergencia cuando él

no estaba, que cuando Ana Builes entró como presidenta del consejo de administración se sugirió al actor presentar unas bitácoras para verificar el seguimiento y cumplimiento de las actividades, sin que representaran un seguimiento de cumplimiento de horarios ni de fechas, y al final, indica que los seguimientos se hacían una vez al mes, salvo que fueran urgentes, y que el actor podía delegar las funciones.

ORBEY ELAS ÁLVAREZ VÁSQUEZ (*desde el minuto 01:58:45, video audiencia, parte 2*), dijo trabaja en la copropiedad demandada, aunque no recuerda la fecha, que trabajó con el actor aproximadamente durante tres meses, que el actor era el administrador de la unidad, que no tenía horario fijo, llegaba 7am, y a veces no volvía después del almuerzo, que no le consta que el actor cumpliera horario de 8am o 5pm, lo sabe porque lo veía entrar y salir de la unidad, que no sabe si el actor tenía que pedir permiso para retirarse de la unidad, que el actor siempre estaba acompañado por un señor con el que caminaba la copropiedad, que el actor no tenía que firmar registro de ingreso o salida de la copropiedad, que no le consta que los miembros del consejo de administración le exigieran horario al actor, o que les informará cuando se retiraba de la copropiedad.

## **2.5. Consideraciones**

Atendiendo a lo indicado en las premisas fácticas y normativas descritas en las líneas que anteceden, la Sala confirmará la decisión adoptada por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto absolvió a la URBANIZACIÓN STANZA P.H. de las pretensiones incoadas por ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ, por encontrarse acreditado que, durante la prestación del servicio, el actor no se encontraba bajo la subordinación de la propiedad horizontal demandada.

Ahora bien, para sustentar el recurso de apelación la parte actora afirmó que, pese de no existir discusión sobre prestación del servicio, el extremo pasivo de la Litis no había desvirtuado la presunción de la existencia de la relación laboral, y por el contrario, se había acreditado que el demandante no contaba con autonomía para el ejercicio de la actividad contratada, concretamente, porque se le exigía el cumplimiento de jornada de trabajo, y se le impartían órdenes específicas para el cumplimiento de las funciones asignadas; sin embargo, la Sala ponderó qué: (i) el cumplimiento de una jornada de trabajo es solo un elemento indicativo de la eventual subordinación, pero no necesariamente es la que la determina (CSJ SL-

14481 de 22-10-2014, Radicado 40604, SL-11661 del 05-08-2015, Radicado 50249, SL-3174 del 24-07-2018, Radicado 57134, SL-2188 del 17-06-2020 Radicado 79720), y (iii) que la existencia de un contrato civil de prestación de servicios profesionales en ningún caso descarta la impartición de instrucciones o el ejercicio de control y supervisión del contratante sobre el contratista, sin que dicha vigilancia, control, y supervisión sea equiparable a los conceptos de “subordinación y dependencia” propios de la relación de trabajo, pues estos últimos tienen una naturaleza distinta (CSJ SL-23724 del 13 de octubre de 2005, SL-28990 del 27-02-2007, SL-2265 del 20-06-2018, Radicado 48492, SL-5224 del 28-11-2018, Radicado 67455).

Adicionalmente, la Sala advierte que de ninguna de las declaraciones que se rindieron al interior del proceso puede inequívocamente inferirse que el actor cumplía con una jornada de trabajo, pues tal hecho fue negado por la representante legal de la parte demandada y los testigos que la misma parte trajo al juicio, y porque el demandante con los testigos citados a su instancia, manifestaron que el actor se hacía presente en las instalaciones de la propiedad horizontal, entre las 7am y las 09am, dicho del que se infiere que el actor no tenía una hora de ingreso determinada, supuesto frente al cual resulta procedente rememorar que la jornada de trabajo es el elemento mediante el cual se fija con precisión el tiempo en el que se van a llevarse a cabo las tareas que constituyen el objeto del contrato, y si el actor no tenía la obligación de prestar el servicio desde una hora fija y determinada, no puede concluirse que cumplía con una jornada de trabajo, sino que simplemente su presencia en la copropiedad era necesaria para realizar estricta y adecuadamente las labores de administración de la copropiedad encomendadas.

De otra parte, la Sala avizora que sobre la vigilancia, control, y supervisión que presuntamente ejercían los miembros del consejo de administración, en concreto, sobre las actividades desarrolladas por el actor, solo proviene del dicho del demandante y de las declaraciones de los testigos de los que solicitó su comparecencia, quienes simplemente hicieron referencia a las constantes llamadas telefónicas que recibía el demandante, sin que hubieren señalado cuáles eran las supuestas órdenes que se le impartían al actor, omisión por la que no es posible para esta Corporación calificar si presuntas órdenes impartidas, realmente tenían la virtud de subordinar la actividad laboral del actor, o simplemente, supervisar o coordinar la prestación del servicio.

La Sala también advierte que, bajo la existencia de un contrato de trabajo, es totalmente improcedente que se produzca la delegación de funciones, toda vez que éste tipo de contrato exige siempre la prestación personal del servicio, y en el asunto que nos convoca, se encuentra acreditado que el actor tenía la facultad de delegar, aunque fuera parcialmente, la ejecución de las funciones asignadas, como ocurrió con el señor Jorge Iván Botero, quien admitió haberse encargado de la supervisión de la copropiedad, mientras el actor se recuperaba de un accidente automovilístico, supuesto sobre el que vale la pena resaltar, que en el plenario no obra prueba irrefutable de la supuesta exigencia que hiciera el consejo de administración para la delegación de funciones, pues quienes afirmaron que dicho supuesto se había configurado, también dijeron que habían conocido del mismo por información suministrada directamente por el actor, y no porque así lo hubieren presenciado, asumiendo para los fines probatorios de la Litis la condición de testigos de oídas.

En lo que tiene que ver con la limitaciones a las funciones que le correspondían al actor como administrado, la Sala encuentra que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 671 de 2001, al consejo de administración le corresponde tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla con sus fines, y dentro de aquellas determinaciones, se consideran válidas, las dirigidas a garantizar la correcta adquisición de los bienes, y adecuada contratación de los servicios requeridos por la copropiedad, que fueron los aspectos sobre los que indicó el actor no tenía la autonomía para tomar decisiones de manera libre e inconsulta.

Finalmente, y en lo que tiene que ver con el presunto cumplimiento de labores que desbordan las funciones que le corresponde al administrador, debe acotarse que en el artículo 51 de la Ley 671 de 2001, se consagran las “*funciones básicas*” del administrador, pero también establece que al mismo le asisten, de forma general, las facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo, por lo que no puede entenderse que el listado de las funciones allí enumeradas, sea taxativo, ni que las labores desempeñadas por el actor, como asistir a las reuniones extraordinarias fijadas por el consejo de administración, hacer las compras directas de los elementos y provisiones de la copropiedad para reducir los costos, y encargarse directamente o por intermedio de terceros de las reparaciones del edificio, sean ajenas al ámbito funcional de la administración de una copropiedad o propiedad horizontal.

#### 4. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los **artículos 365 y 366 del CGP**, y atendiendo a que el recurso de apelación interpuesto por ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ no salió adelante, a su cargo se impondrán costas procesales. En atención a lo dispuesto en el **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura**, se fijan como agencias en derecho la suma de \$454.263, equivalente a medio SMMLV en favor de URBANIZACIÓN STANZA P.H.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### 5. RESUELVE

**PRIMERO:** CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el 27 de agosto de 2020, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ en contra de URBANIZACIÓN STANZA P.H.

**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo de ANDRÉS EDUARDO MEJÍA VÉLEZ, fijándose como agencias en derecho en favor de URBANIZACIÓN STANZA P.H., la suma de \$454.263, equivalente a medio SMMLV.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

En constancia se firma por los intervinientes:

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente

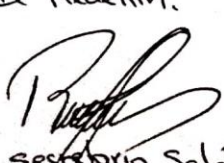
  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

  
**CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**  
Magistrado

  
**RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario

*Constancia Secretarial*

*Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.*

  
**SECRETARIO SALA LABORAL**  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL  
SECRETARÍA

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS No.098**, fijados en la secretaría del Tribunal, hoy **08 de junio de 2021** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en ["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

**RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS**  
Secretario